32

El homicidio cometido, después de una acción de armas, contra el jefe de uno de los bandos en lucha, es delito común.

Recurso de nulidad interpuesto por doña Carolina Puga viuda de Puga en la causa que sigue contra Alejandro Méndez y otros, por homicidio.—Procede de Trujillo.

DICTAMEN FISCAL

Excmo. Señor:

El 16 de marzo de 1885, el doctor don José Mercedes Puga, Jefe de las fuerzas constitucionales que, en el Norte de la República, hacían la guerra al Gobierno que presidía don Miguel Iglesias, tomó la ciudad de Huamachuco, después de un combate con las fuerzas que defendían la plaza; y, dos horas después de terminada la lucha, como se dirigiera sólo, por una de las calles de la población, a consecuencia de la llamada de una mujer, y con el objeto de evitar un desorden que, según ésta, estaban cometiendo sus propios soldados, fué muerto por un grupo de hombres parapetados en dicha calle. Tales son los hechos que resultan demostrados de las diversas declaraciones del sumario.

La muerte de Puga no fué, pues, ocasionada precisamente por la circunstancia de haber tomado parte en el combate, ni una consecuencia

necesaria de él. Terminado éste, ya no estaba sujeto a sus efectos, hasta cierto punto casuales, y que no pueden de ningún modo imputarse a persona determinada. Por el contrario, las pruebas producidas inclinan a creer, fundadamente, que se preparó una celada y que esa muerte fué un acto premeditado y realizado con intención verdaderamente criminal.

No desvirtúa en lo menor el carácter con que ese hecho aparece revestido, la consideración de que se cometió con motivo de una acción bélica y que fué uno de los funestos resultados de ésta; porque ni las luchas internacionales, ni menos las civiles, pueden legitimar jamás el empleo de todo género de medidas hostiles contra el enemigo, sea cual fuere su naturaleza. Esas medidas están señaladas por los tratadistas de derecho, y entre ellas, no sólo no se encuentra, sino que, por el contrario, es reprobada, la de dar muerte, determinada e intencionalmente, al Jefe de una de las fuerzas contendientes.

En concepto del Fiscal, la muerte del señor Puga, tal como se presenta por lo actuado en el sumario, es, pues, un verdadero asesinato, a cuyos autores pueden favorecer, como circunstancias atenuantes, las de haber sido efecto de la pasión política y del acaloramiento en que es natural suponer se encontraban después del combate; pero cuyas circunstancias no le quitan su carácter de delito común.

La excepción de incompetencia que se ha interpuesto, carece, pues de fundamento, y el auto de la Ilustrísima Corte Superior de la Libertad, por el que se declara fundada y se sobresée en el conocimiento del juicio, es a todas luces ilegal.

Suponiendo que el delito cometido fuera realmente político y estuviera comprendido en el de-

creto de amnistía de 5 de diciembre de 1885 anulado posteriormente por la ley que declaró nulos todos los actos gubernativos internos practicados por don Miguel Iglesias, no por esto podría sustraerse esta causa a la jurisdicción de los jueces comunes, porque, según la ley, éstos conocen de los juicios criminales que se inician para castigar a los delincuentes políticos; y, en el caso supuesto, si dicho decreto de amnistía subsistiera, a estos jueces correspondería, una vez demostrado el carácter político del delito, mandar cortar el juicio. En la hipótesis, pues, de que la muerte de Puga fuera un delito de esta naturaleza, la jurisdicción ordinaria estaría expedita para conocer de esta causa.

Esta muerte no puede considerarse tampoco como un delito militar, ni comprendido en ninguno de los casos a que se refiere el artículo 94 de la Sección Adicional del Reglamento de Tribunales.

Con sujeción a este artículo, modificado en parte por el 6.º de la Constitución vigente, que abolió los fueros personales, los únicos delitos que deben ser juzgados conforme a las Ordenanzas y demás leyes del Ejército, y por los jueces y Consejos establecidos por ellas, son aquellos por los que se infringen los deberes militares y las ordenanzas y disposiciones que los señalan y prescriben; pero no los delitos comunes por su naturaleza, aun cuando se cometan en servicio militar, o en cuartel, fortaleza o campamento; porque estos, según el mencionado artículo 6.º de la Constitución, caen bajo la jurisdicción de los jueces comunes.

Por estas consideraciones, el Fiscal opina que hay nulidad en el auto de vista, por el que se declara fundada la excepción de jurisdicción dedu-

cida por los enjuiciados Alejandro Mendez y Manuel Chamorro y se sobresée con respecto a estos y demás acusados; y que revocándolo, se confirme el de primera instancia, que desecha dicha excepción y sobreseimiento; salvo el más acertado parecer de V. E.

Lima, 29 de diciembre de 1888.

ESPINOSA.

RESOLUCIÓN SUPREMA

Lima, 6 de setiembre de 1889.

Vistos; de conformidad con lo expuesto por el señor Fiscal, y por los fundamentos de su dictamen, que se reproducen: declararon haber nulidad en el auto de vista de fojas ciento ocho vuelta, su fecha veintiuno de noviembre de mil ochocientos ochenta y siete, y reformándolo, confirmaron el de primera instancia de fojas noventa y nueve vuelta, su fecha veintiseis de Agosto del mismo año, por el que se declara sin lugar la excepción de jurisdicción deducida por los enjuiciados Alejandro Mendez y Manuel Chamorro, y se desecha el sobreseimiento solicitado por los mismo reos; y los devolvieron.

Muñoz — Sánchez — Chacaltana — Alvarez — Loayza — Guzman — Galindo.

Se publico conforme a ley; de que certifico.

Juan E. Lama.

Cuaderno N.º 840.—Año 1888.